

FOJA: 32 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-5944-2023
CARATULADO : AGUILÓ/FISCO DE CHILE - CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO DE CHILE

Santiago, diecinueve de Octubre de dos mil veintitrés

VISTOS:

A folio 1, rectificada a folio 6, comparece la abogada Magdalena Garcés Fuentes, en representación de **MACARENA AGUILÓ MARCHI**, comunicadora audiovisual, ambos domiciliados para estos efectos en Doctor Sótero del Río 326, oficina 707, Santiago, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por Raúl Letelier Wartenberg, presidente del Consejo de Defensa del Estado, con domicilio en Agustinas N° 1225, 4° Piso, comuna de Santiago, solicitando se le condene a pagar al demandante la suma de \$200.000.000, o la suma que en justicia se estime, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago total y efectivo, todo ello con costas.

Funda su demanda, señalando que su representada se encuentra reconocida por la Comisión de Prisión Política y Tortura con el N° 2 de la Nómina de menores de edad nacidos en prisión o detenidos con sus padres.

Añade que entre el 12 de marzo y el 4 de abril de 1975, cuando Macarena tenía 3 años y medio de edad, fue detenida junto a otros familiares por agentes de la DINA, estuvo alrededor de 10 días en Villa Grimaldi y luego fue trasladada a la casa de Elsa Orostica quien trabajaba como asesora de hogar en la casa de Macarena, todo ello en el contexto de la persecución política hacia su padre, Hernán Aguiló Martínez, dirigente de la Comisión Política del MIR. Por otro lado, su madre, Margarita Marchi, había sido detenida previamente por agentes de la Fuerza Aérea (SIFA) en enero de 1975, y llevada al centro clandestino de detención y torturas conocido como



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NJWXXXMXXT

“la Casa amarilla”, lugar donde fue torturada y estuvo detenida hasta el 9 de abril de ese mismo año, cuando fue expulsada a Colombia.

Refiere que el día 4 de abril de 1975 Macarena fue secuestrada por agentes del estado, durante 17 días su familia no tuvo noticias de su paradero. El día 11 de abril de 1975 su abuelo paterno presentó un recurso de amparo en favor de su nieta. Recién el 22 de abril de ese mismo año, logran recuperar a Macarena, había sido llevada al Hogar N° 4 de Carabineros, ubicado en Manuel Montt 2741, traslado que jamás fue informado a su familia.

Expresa que el secuestro experimentado, la separación forzada de su familia, el haber estado expuesta a torturas psicológicas (presenció allanamientos, destrozos de sus enseres, vejaciones a sus familiares y a ella misma; sufrió apremios ilegítimos con el propósito de obtener información acerca del paradero de su familia, permaneció en recintos especiales de detención y tortura, entre otros), para luego partir al exilio y ver modificado todo el proyecto de vida tanto de ella como de su grupo familiar; todo lo cual se profundiza por el hecho de ser una niña pequeña a la fecha de ocurrencia de los hechos, han provocado en su representada cuadros de depresión, trastornos del sueño y de ansiedad, crisis de pánico, todos signos y síntomas de un trastorno de estrés postraumático crónico.

Como fundamentos jurídicos de su pretensión invoca los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución Política; la Ley 18.575, que establece la responsabilidad del Estado en diversos artículos, agregando que dicha responsabilidad es de derecho público.

Seguidamente cita doctrina en materia de Responsabilidad del Estado, sus características, puntualizando en que el hecho ilícito reclamado en autos se enmarca como un crimen de lesa humanidad, señalando los tratados internacionales que regulan la materia.

Finaliza haciendo una referencia a la imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria y la concurrencia de los requisitos para indemnizar en el caso de autos.



A folio 12, rola el acta de la notificación de la demanda, practicada de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil el día 08 de mayo de 2023.

A folio 13, compareció el Fisco de Chile, representado por la abogada procuradora fiscal (s) del Consejo de Defensa del Estado, Carolina Vásquez Rojas, contestando la demanda civil de indemnización de perjuicios, solicitando el rechazo de la acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; en subsidio, que se rebaje sustancialmente el monto pretendido.

Alega como primera defensa, excepción de reparación integral, al efecto sostiene que resulta improcedente la indemnización solicitada por haber sido reparada la demandante, principalmente a través de tres tipos de compensaciones, (a) reparación mediante transferencias directas de dinero, (b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, y (c) reparaciones simbólicas.

Hace hincapié que en la especie, la actora ha percibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N°19.992 y sus modificaciones, sobre prisioneros y torturados políticos; estableciéndose una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad, a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de Prisioneros Políticos y Torturados” de la nómina de personas reconocidas como víctimas. Adicionalmente, el actor recibió Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

Agrega que a los beneficiarios, tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, les fue concedido el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país, agregando que también se les otorgaron beneficios educacionales, consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, a través de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación; y asimismo, beneficios en vivienda; de



lo que resulta concluir que los referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no pudiendo ser, entonces, reparados nuevamente; citando jurisprudencia relativa a tal situación.

En subsidio, opone excepción de prescripción extintiva de 4 años con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, puesto que de acuerdo con el relato fáctico de la demandante, la privación de libertad y torturas ocurrió entre el día 24 y 27 de marzo de 1983. En efecto aun cuando se considerase que la prescripción estuvo suspendida durante el período de la dictadura militar, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **28 de febrero de 2023**, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332.

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Añade que los tratados internacionales que rigen en esta materia, no establecen de manea explícita la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria civil, por lo que no existiendo una norma especial debe recurrirse al derecho común; pues cualquiera sea el origen o naturaleza de la indemnización de perjuicios, su contenido es netamente patrimonial.

Destaca que Chile, al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana, formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, esto es, el 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

En subsidio, alega que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos



por los Tribunales; por último, alega la improcedencia del cobro de reajustes e intereses.

A folio 16, la demandante evacuó el trámite de la réplica, señalando que el Fisco no ha discutido los hechos invocados en la demanda, para luego controvertir las excepciones de reparación integral o satisfactiva y de prescripción.

A folio 18, el Fisco de Chile evacuó el trámite de la dúplica, reiterando las argumentaciones expuestas en su contestación de la demanda, insistiendo en la excepción de reparación satisfactiva y de prescripción.

A folio 19, se omitió el llamado a conciliación y se recibió la causa a prueba.

A folio 56, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: A folio 1, rectificada a folio 6, comparece la abogada Magdalena Garcés Fuentes, en representación de **MACARENA AGUILÓ MARCHI**, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del **FISCO DE CHILE**, solicitando se le condene a pagar al demandante la suma de \$200.000.000, o la suma que en justicia se estime, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago total y efectivo, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, notificada legalmente la demanda, fue contestada conforme las alegaciones y defensas reseñadas en la parte expositiva, mismas que las partes replicaron y duplicaron oportunamente.

TERCERO: Con el objeto de acreditar sus dichos, la parte demandante rindió únicamente prueba instrumental, inobjetada de contrario, consistente en:

A folio 22:

1.- Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura,
Valech 1



2.- Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 1 en la que Macarena Aguiló Marchi figura con el número 2 del anexo “Menores de edad nacidos en prisión o detenidos con sus padres”, que se encuentra en la parte final del documento.

3.- Copia de antecedentes de carpeta de doña Macarena Aguiló Marchi del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

4.- Certificado de nacimiento de mi representada emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

A folio 23:

5.- Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago, seguidos por la misma materia.

6.- Artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.

7.- Artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.

8.- Artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.

9.- Artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.



A folio 24 y 25:

10.- Copia del texto íntegro del Libro “Trauma Relacional Temprano. Hijos de personas afectadas por traumatización de origen político”, cuya autora es doña Elena Gómez Castro, médico siquiátra, Editado por Ediciones Universidad Alberto Hurtado, en el mes de Agosto del año 2013.

11.- Informe psicológico de daño de doña Macarena Aguiló Marchi emitido por el PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Central, de fecha 05 de Diciembre de 2022.

De folio 31 a folio 50:

12.- Copia de la causa rol 143-2016, substanciada por el Sr. Ministro en Visita Extraordinaria, Mario Carroza Espinosa, por sustracción de menores y apremios ilegítimos, respecto de doña Macarena Aguiló Marchi,

CUARTO: A su turno la parte demandada solicitó, en el primer otrosí de folio 13, oficio al Instituto de Previsión Social para informe sobre los montos percibidos por la demandante Macarena Aguiló Marchi, especialmente en relación a las leyes 19.123, 19.234, 19.992, 20.874, y demás pertinentes.

A folio 28, se agregó el informe del Instituto de Previsión Social, el cual señala, en síntesis, que la actora **Macarena Aguiló Marchi, cédula de identidad 8.515.208-4**, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura (Ley Valech), es beneficiaria de: **(a)** Ley 19.992, habiendo recibido la cantidad de \$35.109.260 por concepto de pensiones; **(b)** \$1.000.000, como Aporte Único Ley 20.874; **(c)** Aguinaldos por la suma de \$609.685; y **(e)** una pensión de \$230.025 al mes de junio de 2023.

QUINTO: Que, son hechos que constan en la causa por no haber sido objeto de controversia, más aún se encuentran acreditados con el mérito de los documentos reseñados en los motivos anteriores, los siguientes:

1.- Que la actora Macarena Aguiló Marchi, cédula de identidad 8.515.208-4, está reconocido en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura (Ley Valech 1), Anexo Menores de Edad Nacidos en Prisión o



Detenidos con sus Padres, individualizada bajo el N° 2 y fue víctima de violencia estatal.

2.- Consta a folio 31, en la causa Rol 143-2016, instruida el Sr. Ministro en Visita Extraordinaria, Mario Carroza Espinosa, por sustracción de menores y apremios ilegítimos, respecto de Macarena Aguiló Marchi, que: **(2.1)** el día 11 de abril de 1975 su abuelo paterno, Jorge Aguiló García, recurrió de amparo por la desaparición de Macarena, que había acaecido el día 04 de abril de 1975, desde la casa de su nana; **(2.2)** por oficio de fecha 21 abril, del Ministerio del Interior de Justicia, consta que Macarena Aguiló Marchi, fue recogida en calidad de abandonada, por el hogar de menores en tránsito N°4 de Carabineros, ubicado en Manuel Montt 2741; **(2.3)** que Macarena Aguiló Marchi fue acogida al programa de reunificación familiar de Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, con el registro N° 601-551, porque su madre se encontraba radicada en Francia, país al que debía viajar a la brevedad; **(2.4)** El financiamiento se hizo con cargo a fondos de Organismos Internacionales; **(2.5)** que durante el periodo posterior a su detención Macarena estuvo al cuidado de su abuelo paterno, Jorge Aguiló García; **(2.6)** con fecha 20 de abril de 1976, cuando Macarena Aguiló tenía 4 años y 8 meses de edad, viajó a Francia a reunirse con su madre.

3.- Que en la calidad de víctima de represión política, ha recibido por aplicación de las Leyes 19.992 y 20.874, la cantidad de \$36.718.945 por concepto de pensiones, aporte único y aguinaldos. Asimismo, percibe una pensión mensual que el 30 de junio de 2023, ascendía a \$230.025.

SEXTO: Que, resulta necesario y oportuno dejar consignado que el 11 de Noviembre de 2003, transcurridos 13 años desde que se restableció el Estado de Derecho en nuestro país, durante el gobierno del Ex Presidente, S.E Ricardo Lagos Escobar, se dictó el Decreto N° 1040, mediante el cual se creó la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el Esclarecimiento de la Verdad acerca de las Violaciones de Derechos Humanos en Chile”, cuyo objetivo, de acuerdo a las palabras del propio gestor, fue determinar el universo de las personas que sufrieron privación de libertad y



torturas por razones políticas, entre Septiembre de 1973 y Marzo de 1990; que se materializó en un Informe que consta de más de 500 páginas, elaborado con 28.000 testimonios considerados válidos (se recibió testimonio de 35.865 personas, residentes en Chile como en el extranjero); de los que, con la debida prudencia y cautela, se dejó constancia en el mismo informe, sin individualizar nombres ni algún otro dato personal, sino únicamente el sexo del declarante, y el lugar en que fue detenido.

Conjuntamente con el informe, la Comisión elaboró un listado con los nombres de las personas a quienes se les reconoció la calidad de Presos Políticos y Torturados, con un total de **27.153** personas.

SEPTIMO: Que, posteriormente, y con ocasión del resultado de la labor de la Comisión, fue dictada la Ley N° 19.992, publicada con fecha 24 de Diciembre de 2004, que “Establece Pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a Favor de las Personas que indica”, cuyo artículo primero, contenido en el Título I “De la pensión de reparación y bono”, dispone: *“Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de Prisioneros Políticos y Torturados”, de la Nómina de personas reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.”*

El artículo segundo, establece que la pensión anual aludida, ascendería a \$1.353.798.- para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad; a \$1.480.284.- para aquellos beneficiarios mayores de 70 o más años pero menores de 75 años; y a \$ 1.549.422.- para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; pensión que se pagaría en 12 cuotas mensuales de igual monto, reajutable conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen dicha disposición.

Su inciso segundo, establece que la pensión referida, sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quiénes se encuentren en tal situación optar por uno de estos



beneficios en la forma que determine el Reglamento; precisando que las personas que ejercieran dicha opción, tendrían derecho a un bono de \$ 3.000.000.-, el que se pagaría por una sola vez dentro del mes subsiguiente de ejercida la opción.

El artículo séptimo, dispone que tanto la pensión como el bono se devengarán a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha en que los beneficiarios presenten sus solicitudes, mismas que podrían impetrarse desde la publicación de la misma ley.

OCTAVO: Que, por otro lado, mediante la Ley N° 20.874, publicada con fecha 29 de Octubre de 2015, que “Otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile”, de acuerdo a su artículo primero, se otorgó un aporte único en carácter de reparación parcial, de \$1.000.000.-, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

El inciso tercero, dispone que: *“Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.”*

NOVENO: Que, en cuanto a la demandante Macarena Aguiló Marchi, cédula de identidad 8.515.208-4, detenta la calidad de “Prisionero Política y Torturado, en su calidad hija menor detenidos con sus Padres”, constando en autos que ha percibido, en tal calidad, las sumas señaladas en el motivo Quinto de este fallo, lo que lleva a establecer que la actora ha sido y es beneficiaria de la Leyes 19.992 y 20.874, como víctima de represión por parte de los agentes del Estado.

DECIMO: Asentado lo anterior, toca referirse a las defensas del Fisco, primeramente alegó la excepción de reparación integral o satisfactiva,



fundada, como ya se explicitara, en que el actor ha sido indemnizado, en razón de haber recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N° 19.992 y 20.874; resultando en consecuencia improcedente ser indemnizados por daños cuya génesis radica en los mismos hechos.

Al respecto, es necesario señalar que tal como sostuvo la jurisprudencia la Comisión Valech no pretendió, en estricto rigor, efectuar una “transacción” con cada uno de los beneficiados, para así precaver la interposición de una acción como la del caso de autos; cuestión que no aparece del tenor literal de la ley, ni tampoco de su espíritu, toda vez que en ella se establece que la pensión sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encontraren en tal situación optar por uno de dichos beneficios en la forma que determine el Reglamento; situación de la que resulta entonces concluir que, no obstante ser la actora beneficiaria de la pensión otorgada por el Estado, en su condición de “menor de edad nacidos en prisión o detenidos con sus padres”, tal hecho no es óbice para que la afectada interpusiera la acción indemnizatoria del caso de autos.

Por lo demás, la situación que afectó a la demandante está dentro de lo que la teoría del derecho de daños estima procedente, en orden a reparar el daño causado y nada más que el daño, centrando la función primordial de la reparación en la víctima. Así, si el Estado es culpable por los atentados a la dignidad humana, la responsabilidad civil se concretiza en la teoría de daños, cuya función esencial es su reparación, efecto que a su vez se radica en el patrimonio del Estado quien tiene el deber de repararlo, entre otras formas, por indemnizaciones pecuniarias.

En tal sentido, está acreditado que la demandante fue vulnerada en su calidad de niña, tan sólo tenía 3 años y medio de edad cuando fue detenida ilegalmente con el objeto de utilizarla como medio o instrumento para detener a su padre, Hernán Aguiló Martínez, militante del MIR, y que durante 22 días estuvo separada de su familia, expuesta constante y permanentemente a situaciones de peligro inminente y, su vivencia de mucho miedo y desolación difícilmente una niña puede superar, y que sin lugar a dudas no es posible



tolerar, menos aún en su condición de niña a la que no solo se la separó de su madre y deambuló por casa de familiares y seres queridos para ella, para luego ser ingresada a un hogar de Carabineros.

El daño que reclama se enmarca en el daño moral y la indemnización por ese daño es una manera de abordar la reparación, pues no se pueden borrar los hechos, y se configura la obligación de otorgar una indemnización pecuniaria que compense el daño causado que no ha sido íntegramente reparado, por lo que la excepción de pago y/o reparación integral opuesta por el Fisco no podrá prosperar.

UNDECIMO: Que, el Fisco también opuso la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria, fundada en los argumentos explicitados con anterioridad en el presente fallo.

Al respecto sólo caber tener especialmente presente que del tenor literal del Artículo 5° de nuestra Carta Fundamental, fluye que el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través del plebiscito y también, se realiza por las autoridades que la misma Constitución establece; y que dicho ejercicio, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Por consiguiente, a través de dicha disposición constitucional, se incorporan al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, entre las que destaca el deber de indemnizar o reparar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos; adquiriendo rango constitucional.

Al respecto la Excm. Corte Suprema, en los autos Rol **22.856-2015**, de fecha 29 de Diciembre de 2015, ha señalado al respecto que, *“tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la*



voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que instaura el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras.

Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente.

Por lo demás, la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado.”

En conclusión, según lo expresado precedentemente, las excepciones de prescripción principal y subsidiaria serán desestimadas, por encontrar ambas su fundamento en normas de derecho interno, preceptos que, como ha



quedado claramente explicitado en el presente fallo, no son aplicables al caso de autos.

El argumento anterior, además ha sido reiterado recientemente en un fallo de fecha **6 de junio pasado**, que señala en su considerando “...**Octavo:** *Que, en suma, pesando sobre el Estado la obligación de reparar a las víctimas y sus familiares consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. No sólo por lo ya expresado sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno. En efecto, el sistema de responsabilidad del Estado deriva además del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad; y, consecuentemente con ello, en su artículo 4° dispone que “el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”. “Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad en que se funda la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado”.* C.S Rol N° 130.949-2020.

DUODECIMO: Que, habiéndose desestimado las excepciones de reparación integral y de prescripción de la acción civil, toca pronunciarse sobre la procedencia de la indemnización pretendida.

Como se ha venido expresando, se encuentra acreditado que la actora Macarena Aguiló Marchi, detenta la calidad de “Prisionero Político y Torturado, en su calidad hija menor de edad detenida con sus Padres”, por lo que es del todo plausible sostener que la detención y separación de su familia a la edad de tres años y medio de edad, se debieron a las convicciones políticas de su padre y madre, quienes eran militantes del MIR, y que los 22



días estuvo separada de su familia, estuvo expuesta constante y permanentemente a situaciones de peligro inminente, y situaciones violentas que a su corta edad y sin la contención de sus padres ni su familia es una situación de vulneración de derechos muy grave respecto a una niña. Posteriormente, estuvo durante meses al cuidado de su abuelo paterno, pues el paradero de su padre era desconocido y su madre se había trasladado a Francia como refugiada política; en este escenario, Macarena Aguiló fue acogida en el programa de de reunificación familiar de Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, con el registro N° 601-551 y con fecha 20 de abril de 1976, cuando ya tenía 4 años y 8 meses de edad, viajó a Francia a reunirse con su madre.

Siendo estas las circunstancias que motivaron su detención y vulneración de derechos en su calidad de niña, separada de sus padres y seres queridos a su más corta infancia, es pertinente señalar que los actos ejercidos por agentes del estado en su persona, debieron necesariamente afectar su estado fisiológico y emocional, de manera inmediata y durante todo el período que estuvo detenida ilegalmente, como también en los tiempos futuros.

Asimismo, con el mérito de los informes psicológicos generales y particular, acompañados a folio 25, es posible establecer una presunción grave, precisa y concordante en cuanto a que una niña de tres años y medio de edad que ha sido violentada en los términos señalados por agentes del Estado, como en el caso de autos, sufrió daños fisiológicos, emocionales y secuelas que deben ser reparados, por cuanto es deber del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como son la integridad física y psíquica, como asimismo, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, no siendo tolerable bajo ningún respecto que sus agentes hayan lesionado los derechos fundamentales de la demandante, por lo que el Estado debe responder.

DECIMO TERCERO: Así las cosas, el daño experimentado por la actora sólo se puede enmarcar dentro de aquél denominado “moral”, por lo que resulta plausible entonces acoger la demanda, y tal circunstancia conlleva



a determinar los perjuicios que las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos sufrieron en el régimen militar. En este caso, resulta especialmente grave la situación de la demandante en relación a la edad en que fue víctima de estos hechos, y los daños futuros que conlleva en su desarrollo progresivo y proyecto de vida.

Ello es una cuestión de ponderación y valoración que se le impone al tribunal, con el objeto de establecer y precisar los daños, la aflicción y el dolor, mismos que no solo son posibles de presumir fundadamente, sino también por el principio de normalidad, que indica que cualquier persona que es o ha sido objeto de apremios ilegítimos y torturas por agentes del Estado sufre un daño que debe ser reparado.

En esta labor de determinación del quantum indemnizatorio, esta sentenciadora considera como aspectos relevantes las siguientes circunstancias: **(a)** la edad en la fue detenida, tan solo tenía 3 años y medio de edad, y su detención se efectuó para utilizarla como medio o instrumento para obtener la ubicación de su padre, perseguido por sus convicciones políticas; **(b)** el periodo de privación de libertad, un lapso de 22 días, entre el 04 y el 22 de abril de 1975. Al periodo antes señalado debe adicionarse el tiempo que estuvo separada de sus padres, particularmente de su madre, quien era la única con ubicación conocida pues su padre vivía en la clandestinidad; a saber, desde enero de 1975 (época en que su madre fue detenida) hasta el mes de abril de 1976, época en que la actora logro reunirse con su madre; y **(c)** la vulneración de derechos fundamentales experimentada en su calidad y condición de niña menor de edad, al verse forzosamente separada de su familia, con las situaciones de peligro inminente que ello implicó en su condición de hija de perseguidos políticos militantes del MIR, estando en casa de familiares, de su cuidadora para luego ingresarla a un hogar de niñas, sin conocimiento de sus seres queridos, cuya experiencia traumática debe ser reparada, en este caso, con una prestación pecuniaria.

DECIMO CUARTO: Sin perjuicio de lo anterior y de que, además, se viene desestimando la excepción de reparación integral y/o satisfactoria, esta



sentenciadora es del parecer de considerar en la indemnización final, los montos percibidos por el actor al amparo de las Leyes 19.982 y 20.874, que ascienden a \$36.718.945 por concepto de pensiones, aporte único y aguinaldos, teniendo para ello la naturaleza de las pensiones otorgadas por el Estado en este tipo de materias.

En efecto, el hecho dañoso que motivó la dictación de las leyes de reparación, a saber ley 19.992 y ley 20. 874, entre otras, fue el hecho ilícito del actuar de los agentes del Estado hacia víctimas que sufrieron persecución política, según quedó así recogido en el Informe Valech. Enseguida, debe tenerse especial atención que el hecho ilícito es la causa adecuada del beneficio y del daño, es decir, que tanto el beneficio como el daño provienen del mismo hecho ilícito.

En este aspecto, las leyes de reparación fueron una reacción positiva del Estado tendientes a lograr intentar reparar el daño causado, lo que en ningún caso inhibe o coarta el derecho a que las personas que se sienten perjudicadas o insatisfechas accionen y soliciten la reparación integral de su daño.

A mayor abundamiento, tanto las leyes de reparación como las indemnizaciones otorgadas por los tribunales cumplen una función reparadora de daños, que emana de la misma naturaleza, cual es el daño moral, siendo ambas compatibles y complementarias.

Así las cosas, la regla de la *Compensatio lucri cum damno* es un principio de imputación de daños, dentro de la teoría del derecho de daños y la reparación integral, por lo que emanando el mismo daño del actuar ilícito de los agentes del Estado, teniendo además la misma naturaleza cual es la reparación del daño moral, por ser víctimas de la Responsabilidad del Estado, el monto ya referido y otorgado estos años debe ser considerado en la suma final a recibir por parte de las víctimas, tal como en el mismo sentido lo resolvió la sentencia ingreso Corte 1763-2020, de esta Corte de Apelaciones.

Por lo anteriormente expuesto se condenará al Fisco de Chile, a pagar a Macarena Aguiló Marchi, la suma única y total de **\$80.000.000.- (ochenta millones de pesos)**, cantidad que se estima justa y equitativa, considerando



que la actora es beneficiaria de las leyes de reparación respectivas ya indicadas. El monto indemnizatorio fijado, deberá pagarse debidamente reajustado entre la fecha del presente fallo y aquella en que se haga el pago total y efectivo; más los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables, devengados entre la fecha que el demandado se constituya en mora hasta el pago efectivo.

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; el Decreto 1040, de 26 de Septiembre de 2003, la Ley 19.992 y la Ley 20.874;

SE DECLARA:

1.- Que se rechazan las excepciones opuestas por el demandado.

2.- Que, se acoge la demanda intentada a folio 1, y se condena al Fisco de Chile a pagar a Macarena Aguiló Marchi, la suma única y total de \$80.000.000, (ochenta millones de pesos), en la forma señalada en el considerando Décimo Cuarto.

3.- Que, no se condena en costas al demandado, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Rol C-5944-2023.-

Regístrese y notifíquese, y elévese en consulta si no se apelare.

Dictada por Isabel Margarita Zúñiga Alvayay, Jueza Titular del Primer Juzgado Civil de Santiago.- (Fgm).-

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diecinueve de Octubre de dos mil veintitrés**



